

EL GRITO DEL PUEBLO

LEMA: QUINTERO PARA PRESIDENTE

No. 14

Panamá, 2 de febrero de 1928

Vale 5 centavos plata

ELIMINASE UNA GRAN ZANCADILLA

Abogados de Diferentes Partidos Políticos Coinciden en Establecer que el General Quintero No Necesita Renunciar Para Ser Postulado Candidato

A continuación insertamos las valiosas opiniones emitidas por seis abogados de la localidad, pertenecientes a diversos matices partidistas, tanto de los partidos históricos como de las facciones personalistas en que se divide actualmente la opinión pública, acerca de la incompatibilidad que han pretendido encontrar algunos adversarios de la candidatura de nuestro popular caudillo, el general Quintero, entre ésta y el ejercicio del puesto de Secretario de Estado, que desempeña por designación espontánea del señor Presidente de la República y a contentamiento general. Como se verá, el concepto es uniforme de que no existe, en el campo legal, ninguna disposición tendiente a establecer tal incompatibilidad, hija de la calenturienta imaginación de interesados en crearle dificultades a nuestro candidato, en la creencia de que su anulación daría por resultado el triunfo de sus personalísimos intereses, que hoy no prosperan merced al sólido prestigio de que goza nuestro jefe. Es un nuevo sablazo al rayo de luz, una nueva desilusión que cosechan los adversarios del general Quintero, al pretender eliminarlo del actual debate, en que este eminente ciudadano se jugará el todo por el todo, ya que, como él mismo lo ha dicho, "esta es la última oportunidad que me resta para coronar la etapa final de mi carrera política." Pierden el tiempo pues, quienes creen que por medio de zancadillas podrán anular la candidatura del general Quintero. Esta sólo podría ser eliminada por medio del voto; prueben este camino, valientemente, nuestros adversarios, y déjense de transitar la vereda en grado sumo tortuosa de la artimaña. Vayan a las urnas que allí su derrota será más noble y gallarda; caerán, pero lo harán con honor.

Siguen las opiniones ya mencionadas:

Panamá, 14 de enero de 1928
Señor General don
Manuel Quintero V.
Presente

He recibido la atenta carta de usted, fechada ayer en la cual me dispensa usted el honor de manifestarme que desea conocer mi "valiosa opinión jurídica acerca de la incompatibilidad que pudiera existir entre el cargo de Secretario de Estado en el

Despacho de Agricultura y Obras Públicas y la proclamación que pudiera hacerse de su candidatura a la Presidencia de la República" y me pide que yo exprese mi concepto en relación con las dos preguntas que me hace en dicha carta.

Permitame, mi estimado amigo, que al darle esta contestación establezca previamente la distinción entre el amigo personal y el adversario político. Secretario de Estado del Presidente de la República, a quien se ha proclamado, y él así se considera, jefe de un partido, lo que de hecho desnaturaliza su carácter nacional de mandatario de la Nación, constituido para dirigir uno de los poderes en que se divide el Gobierno de la República, que tiene por objeto amparar los derechos de todos los ciudadanos por igual.

Por esta razón comenzaré por decirle que nada vale una opinión jurídica en el estado en que se encuentra el país, porque sólo predominará, en quienes tienen que resolver el punto con autoridad legal, la voluntad del Presidente, al margen de la Constitución y de la ley.

Con esta necesaria advertencia, contesto sus dos preguntas así:

1º—Ejerciendo usted actualmente las funciones de Secretario de Estado, en el caso de ser usted proclamado candidato a la Presidencia de la República, no hay incompatibilidad entre dichas funciones y la mencionada proclamación, según la ley 60 de 1925, sobre elecciones populares, expedida por la Asamblea Nacional el 28 de marzo y sancionada el 31 por el Poder Ejecutivo de la presente Administración.

2º—Conforme a la letra del texto legal, NO tendría usted que separarse del cargo de Secretario de Estado, ni aun después de proclamado candidato a la Presidencia de la República; pero conforme al espíritu de las disposiciones penales relativas a la coacción electoral, si hay incompatibilidad entre las actividades de un candidato y las funciones de un Secretario de Estado. Si este criterio predominara en los funcionarios a quienes incumbe resolver con autoridad legal el punto en cuestión, debería usted separarse de la Secretaría tan pronto fuera hecha, en forma legal, la proclamación de su candidatura. Como las dos cuestiones por

usted propuestas están enlazadas entre sí, expongo en conjunto las razones en que me fundo para contestar sus preguntas en la forma que antecede.

El código administrativo establecido por primera vez entre nosotros la organización legal de los partidos políticos y de la proclamación de los candidatos—artículos 226 a 230—En capítulo separado, décimosexto, que trata de la no elegibilidad, consignó en forma sencilla y moralizadora este precepto absoluto y único de ese capítulo: "Los empleados públicos, nacionales o municipales, que sean proclamados candidatos para puestos públicos remunerados de elección popular, están en el deber de renunciar sus destinos el mismo día de la proclamación. Los votos en contravención a lo que dispone este artículo son nulos." (Artículo 310).

Bueno es dejar constancia de que las disposiciones del código administrativo referentes a elecciones populares, fueron previamente consideradas al tratarse del proyecto, y acordadas, a lo menos en sus bases esenciales, en varias reuniones, convocadas por el Presidente de la República, en que estaban representados todos los partidos y en que reinó la mayor armonía y el propósito sincero de establecer lo mejor para asegurar la libertad y efectividad del sufragio. Si hubo algún error, fue de buena fé; pero es lo cierto que el sistema acordado se alteró un poco después, sin que se hubiera demostrado en la práctica leal y honrada de sus disposiciones, los defectos de que sin duda adolecía como obra de la imperfección humana. Las reformas que se introdujeron están marcadas por una tendencia contraria al espíritu que prevaleció en la discusión de las bases acordadas.

Los artículos 226 a 230 del C. A., fueron derogados por la ley 46 de 1919, pero el artículo 310 quedó en vigor.

La ley 60 de 1925 volvió a establecer reglas sobre la existencia legal de los partidos políticos y la proclamación de candidatos, pero al derogar íntegramente el título IV del C. A., sobre elecciones, dejó insubsistente la prohibición saludable del artículo 310 ya copiado.

Conforme al C. A., mientras rigieron sus disposiciones relativas a los partidos políticos y los candidatos, no había tiempo determinado para lanzar candidatos

y desde luego tan pronto los partidos políticos, cuya existencia estuviera legalizada, lanzaran sus respectivos candidatos, si esa designación recaía en persona que estuviera desempeñando algún cargo público, debía renunciar inmediatamente, con arreglo al artículo 310.

Mientras rigió dicho artículo, después de derogadas las otras disposiciones relativas a los partidos políticos y los candidatos, es claro que no habiendo limitación alguna sobre el derecho a lanzar candidaturas, los funcionarios públicos quedaron en la situación de que, al admitir ser lanzados candidatos en cualquier forma, debían renunciar el empleo.

Las disposiciones de la ley 60 ya citada, relativas a los partidos políticos y los candidatos, difieren substancialmente de las del C. A. que ya estaban derogadas. Según el artículo 50 de esta ley, sólo los partidos políticos o agrupaciones de la misma índole, cualquiera que sea su denominación, tienen derecho a lanzar candidatos para cargos de elección popular, y para ello deberán comunicar su existencia al Jurado Nacional de Elecciones, acompañando copia del acta de fundación, a más tardar treinta días antes del término fijado para las votaciones. De manera que puede haber candidaturas adoptadas a última hora y que, aunque hayan estado preparándose con la debida anticipación, no se consideran legalmente proclamadas sino después de que, hasta treinta días antes de las votaciones, se comunique al jurado nacional de elecciones la existencia del partido político que adopte la candidatura. La adopción de candidatos para presidente de la República y diputados a la Asamblea Nacional deberá ser comunicada al jurado nacional de elecciones por lo menos treinta días antes del fijado para las votaciones.

En las disposiciones sobre la no elegibilidad que contiene la ley 60, no se dice nada respecto de la elección de presidente de la República. Las prohibiciones que contienen los artículos 54 y 55 no se refieren más que a la elección de diputados a la Asamblea Nacional y concejeros municipales y hasta para poder ser elegido, que dentro de los seis meses anteriores a la elección, el candidato para diputado no haya desempeñado los empleos de pre-

sidente de la República, designado, secretario de estado, magistrado de la corte, procurador general de la nación, juez superior de la República o cualquier otro empleo con mando o jurisdicción en toda la nación, o que no haya ejercido mando o jurisdicción en todo un círculo electoral, dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a las votaciones. En cuanto a los empleados públicos que ejerzan jurisdicción o mando que no se extienda a todo un círculo electoral y que hayan ejercido sus funciones noventa días antes al de las votaciones, no podrán ser elegidos diputados por dicho círculo electoral, pero sí por otro diferente.

El artículo 55 se limita a prohibir la elección para concejeros municipales, en el distrito en que ejerzan o hayan ejercido sus funciones en los treinta días inmediatamente anteriores a las votaciones, del gobernador, alcalde del distrito, corregidor, juez municipal, tesorero municipal o cualquier otro empleado con mando y jurisdicción en la provincia o en el respectivo distrito. Aunque la ley no lo dice se comprende que por extensión la prohibición alcanza a los demás empleados de que trata el artículo anterior.

El artículo 56 se limita a declarar nulos los votos emitidos en contravención a los artículos precedentes.

Nada más contiene a este respecto el capítulo de la no elegibilidad; pero el artículo 108 declara que son nulos los votos que se den a personas no elegibles de acuerdo con la constitución y esta ley; de manera que, para saber quién no puede ser elegido presidente, hay que ocurrir a los artículos 82 y 83 de la Constitución, según los cuales el presidente de la República que hubiere ejercido la presidencia dentro de los 18 primeros meses inmediatamente precedentes a la nueva elección, no puede ser reelegido; el ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la presidencia y la hubiere ejercido dentro de los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo presidente, como ningún pariente suyo comprendido dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco podrá ser elegido para este empleo.

Por consiguiente, no existe prohibición legal o constitucional alguna que prohíba y sirva para declarar nula la elección de presidente recaída en persona que desempeñe el empleo de Secretario de Estado, aunque esté ejerciendo sus funciones el mismo día de la elección, lo cual me parece una omisión deliberada muy censurable. El inconveniente quedaba obviado con el artículo 310 del C. A., pero, como ya he dicho, este artículo está derogado.

Para justificar ahora mi conclusión final sobre la segunda pregunta, acerca del espíritu de las disposiciones relativas a la coacción electoral, me basta re-

ferirme al artículo 27 de la ley 62 de 1925 en que se reformó el artículo 148 de la ley 68 de 1923, para el solo efecto de permitir el atentado que viene cometiéndose y que la ley anterior calificaba de coacción electoral, de "exigir de los empleados públicos que contribuyan con parte de sus sueldos para atender a los gastos electorales de determinada agrupación política y remover a los que se nieguen a pagar la cuota que se les asigne." (inciso cuarto del artículo 148, que fue suprimido en el artículo 27 de la ley 62).

Si fuera de los casos más directos de coacción electoral, se define como tales los actos de "prevenir, recomendar e insinuar a sus inferiores en privado o en público verbalmente o por correspondencia, directa o indirectamente, o de cualquiera otra manera que trabajen en favor o en contra de determinados candidatos en las elecciones, o que voten o no voten por tales candidatos." es obvio que resulta incompatible el ejercicio de una Secretaría de Estado con las actividades de un candidato a la Presidencia de la República, a quien le estaría prohibido la recomendación indirecta de su candidatura.

Esta es, a mi juicio, la doctrina que resulta del espíritu de la ley aún con todas las deficiencias estudiadas de que ella adolece; pero, es lo cierto que las disposiciones en que se castiga la coacción electoral son letra muerta. Ahora mismo estoy seguro de que el Presidente de la República estima, y nadie tiene poder para demostrarle lo contrario, que él no ha violado el inciso cuarto del citado artículo 27, que le prohíbe "intervenir en el funcionamiento de las corporaciones electorales concurrendo a sus sesiones, manifestando en ellas sus opiniones y ejerciendo presión para imponerla," a pesar de que es público y notorio que él intervino el día primero de enero en el jurado nacional de elecciones, comunicándose por teléfono con el presidente de dicha corporación dándole instrucciones sobre el asunto que se trataba en ese momento, que era la expulsión del miembro del jurado, Licenciado Francisco Filós. Después de esto como prueba la más fehaciente de que él había obtenido lo que se proponía del jurado nacional de elecciones, se apresuró a nombrar otro miembro del jurado para que ocupara el puesto del miembro anulado, que en realidad le correspondía al doctor Julio J. Fábrega, y fue designado por el presidente y por todos los secretarios de estado, en consejo de gabinete, el señor Tomás Gabriel Duque, quien es a la vez primer designado para ejercer el poder ejecutivo y había sido electo diputado para el período actual, lo que, apegándose a la letra de la ley, debe considerarse prohibido por el parágrafo del artículo 12 de la ley 60 de 1925. Sin duda se dirá que esa prohibición no subsiste respecto al señor Duque

porque él perdió la diputación, pero esa distinción no la hace el texto legal citado, y habría que ocurrir a la interpretación de su espíritu para establecer lo contrario. Pues del mismo modo debería atenderse el señor presidente al espíritu y no a la letra de la ley, para no alegar que él no ha violado el inciso 4º del artículo 27 de la ley 62, porque no fue personalmente a la sesión del jurado y se limitó a comunicar sus instrucciones al presidente de dicha corporación por teléfono.

Perdone el amigo que me haya extendido en todas estas consideraciones al darle el concepto que me ha pedido, pero en las circunstancias actuales y dado mi carácter de miembro de una agrupación que viene luchando por que se restablezca el verdadero sistema republicano en el país, porque se respete el sufragio y se moralice la administración del gobierno, no me era posible limitarme a darle un concepto que, en lo sustancial, contesta satisfactoriamente para usted a sus preguntas, para establecer las debidas salvedades, porque al admitirlas podría interpretarse mal mi actitud, en presencia de un gobierno que nada respeta y para quien no hay otra ley que la voluntad del presidente de la República.

De usted, con sentimiento de la mas distinguida consideración personal, me suscribo su atento seguro servidor y amigo.

Fernando Guardia

A esta opinión sólo le haremos el comentario de que no hay dictamen más imparcial que el del adversario político.

Señor General
Manuel Quintero V.
Secretario de Estado,
E. S. D.

Estimado General y amigo:

Como desea usted conocer mi opinión acerca de la incompatibilidad que pudiera existir entre el el puesto de Secretario de Estado, que desempeña Ud. y la proclamación q' pudiera hacerse de su candidatura a la Presidencia de la República, voy a contestar, según mi leal saber y entender, el interrogatorio que me hace usted, en la forma siguiente:

1a. Pregunta.—"Ejerciendo yo actualmente las funciones de Secretario de Estado, en el caso de ser proclamado candidato a la Presidencia de la República, habría incompatibilidad entre dichas funciones y la mencionada proclamación?"

Contestación: No hay incompatibilidad ni constitucional, ni legal, ni moral.

El artículo 2º de la ley 60 de 1925, sobre elecciones populares, establece de un modo terminante y preciso que "son electores elegibles todos los ciudadanos varones en ejercicio, con las LIMITACIONES QUE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES ESTABLECEN". Y es principio consagrado en jurisprudencia que cuando el sentido de la ley es cla-

ro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu; como así mismo estimase insubsistente una disposición legal, por declaración expresa del legislador o por existir una nueva ley que regule íntegramente la materia a que la disposición anterior se refería.

Para ser Presidente de la República la Constitución sólo requiere que el ciudadano elector sea panameño de nacimiento y haya cumplido 35 años de edad, capacidad y condición que concuerden con usted. Las restricciones y limitaciones se refieren a la reelección del presidente, a los designados y a la elección de los parientes del jefe del Poder Ejecutivo.

La ley 60 de 1925, de carácter especial, ha derogado ÍNTEGRAMENTE el capítulo IV del código administrativo y todas las disposiciones anteriores a su promulgación y en NINGUNO de sus artículos establece incompatibilidad entre las funciones de Secretario de Estado y su proclamación como candidato a la Presidencia. El artículo 310 que obligaba a los empleados públicos proclamados candidatos a renunciar al empleo el mismo día de su proclamación, fue reformado, primero, por la comisión preparatoria del proyecto de ley sobre elecciones y derogado, después, por voluntad expresa y unánime de la Asamblea Nacional, que lo reemplazó por el capítulo VI de la ley 60 de 1925, cuyo tenor es:

"Capítulo sexto

De la no elegibilidad

Artículo 54.—No pueden ser elegidos DIPUTADOS a la Asamblea Nacional los ciudadanos que el día de la votación desempeñen o hubieren desempeñado, dentro de los seis meses anteriores a ésta, los empleos de Presidente de la República, Designados, SECRETARIO DE ESTADO, Magistrado de la Corte, Procurador General de la Nación, Juez Superior de la República o cualquiera otro empleo con mando y jurisdicción."

Las leyes tienen origen en la Asamblea Nacional, que es el ÚNICO poder que puede adicionarlas, reformarlas o derogarlas. El criterio jurídico que informa las leyes puede ser materia de discusión; más su observancia y correcta aplicación son obligatorias para todos, sean ellas buenas o malas, favorezcan o no a determinados intereses particulares o entidades políticas. La terminología jurídica tiene su acepción especial, y la conclusión q' de ella se saque conduce a errores y a equivocaciones, frutos unas veces de la ignorancia y otras de la malicia.

La ética tampoco se opone a que un Secretario de Estado en ejercicio de sus funciones sea proclamado candidato a la Presidencia, si se considera que en los Estados Unidos de Norteamérica y en la casi totalidad de los Estados europeos,—que cierta-

EL GRITO DEL PUEBLO

Semanario Liberal.

Lema: QUINTERO PARA PRESIDENTE

Pauta: Cultura en el debate.—Firmeza en la convicción.—Sinceridad ante todo: para con los amigos y para con los adversarios.

Director—Administrador:
Dr. JOSE E. ARJONA.Redactores:
I. Jurado Quintero.—Augusto Arjona Q.—Horacio Moreno y A.—Ricardo A. Pardo.—Eliseo Echávez.—Valentín Henríquez V.—F. G. Morales.
Editorial ACCION COMUNAL.

Bondadoso, Si; Ingenuo, Nunca!

A los comentarios que hicimos en nuestro editorial anterior, acerca de la incompatibilidad acusada por adversarios de la candidatura del general Manuel Quintero Villarreal, entre las funciones de Secretario de Estado y las actividades de candidato a la Presidencia de la República, agregamos el siguiente.

No es que el general Quintero pretenda mantenerse pegado al puesto de secretario, como el ostión a su concha. No. Nuestro invicto caudillo conoce sumamente bien sus deberes y los cumple con toda oportunidad. Adopte la Convención Nacional del Partido Liberal su candidatura y la ciudadanía verá regocijada cómo el general Quintero, sin parar mientes en que no hay disposición legal que se lo exija, dejará el puesto que ocupa, para confundirse con la masa y a su lado luchar sin preeminencia oficial de ningún género.

Pero de esto, de someterse al imperativo categórico de una estricta moral política, a dejarse envolver en las redes de la artimaña o entregar su suerte despreocupadamente al capricho de sus adversarios, va larga distancia.

El general Quintero será un hombre bondadoso y sencillo, pero no un ingenuo, con quien pueda jugarse a la medida de malignos antojos. Poco lo conocen quienes de tal lo conceptúan. Cuidado como muchos de los vivos que por allí pululan no tienen como él tan desarrollado el sentido de la verdadera habilidad, de la habilidad constructiva.

De resultados, y no de conjeturas, vive la política. Esperemos a ver quién cosecha los mejores en la presente lid. Cuanto a nosotros, tenemos la seguridad más absoluta de que en ella vencerán los gallardos y nobles; no los malandrines de la audacia, expertos en la zancadilla!

mente nadie será tan osado en calificar de inmorales—los presidentes, los ministros, los senadores y los diputados no solamente postulan su candidatura, sin renunciar previamente el cargo que desempeñan, sino que ellos mismos presiden o dirigen las operaciones electorales, sea fomentando parte de directorios especiales de propaganda, sea pronunciando discursos ante las masas electorales.

Lo que no es inusual entre pueblos civilizados no debe ni puede serlo entre nosotros.

Segunda Pregunta.—Tendría yo que separarme del cargo de Secretario de Estado, antes o después de tal proclamación y en ese caso, cuando debería hacerlo?

Contestación. Negada la primera pregunta, la segunda es de más; pero como no me creo infalible, ni capacitado para hablar *ex cathedra*, admitido y no conseguido que un Secretario de Estado proclamado candidato a la Presidencia debe separarse de sus funciones, surge la doble cuestión de saber quién tiene el derecho de lanzar candidaturas y cuándo lo puede ejercer a fin de que prosperen legalmente.

El artículo 50 de la ley 60 de 1925 dice: "Sólo los partidos po-

líticos o agrupaciones de la misma índole, cualquiera que sea su denominación, tienen derecho a lanzar candidatos para cargos de elección popular. PARA TENER DERECHO A LANZAR CANDIDATOS para presidente de la República y diputados, deberán comunicar su existencia al Jurado Nacional de Elecciones, acompañando copia del acta de fundación, a más tardar treinta días antes del término de la votación."

A la luz y recta aplicación de la disposición citada, para que usted sea considerado o se le considere como candidato, es forzoso que el partido o agrupación política que simpatiza con o postule su candidatura de usted para presidente, adquiera con anterioridad y dentro del término señalado el derecho respectivo; y, mientras esto no suceda, todas las manifestaciones en favor de usted no pasan de ser unos mercedios lícitos de propaganda preparatoria de la candidatura.

Servidor y amigo,
Antonio Papi Aizpuru

Panamá, enero 20 de 1928
Señor General don Manuel Quintero V.
Ciudad de Panamá.
Estimado General.

En atenta carta del trece del

presente mes, que no me había sido posible contestar antes, por lo que le pido excusas, me consulta usted:

"1.—Ejerciendo yo actualmente las funciones de secretario de estado en el caso de ser proclamado candidato a la presidencia de la República, habría incompatibilidad entre dichas funciones y la mencionada proclamación?"

Contesto:
El código administrativo, en su artículo 310, establecía que los empleados públicos, nacionales o municipales, que fueran proclamados candidatos para puestos públicos remunerados de elección popular, estaban en el deber de renunciar sus destinos en el mismo día de su proclamación. Los votos dados en contravención a lo que disponía este artículo eran, nulos. Este precepto legal quedó vigente a pesar de que la ley 46 de 1919 derogó el cap. VI, título IV, libro primero del código citado, íntimamente vinculado con él; de suerte que mientras rigió tan laudable y moralizadora disposición, todo candidato a puesto público remunerado de elección popular tenía la obligación de renunciarlo, so pena de nulidad de los votos que se emitieran en su favor.

Mas la ley 60 de 1925 reemplazó totalmente el título del código administrativo que trataba de las elecciones populares, y en ella no se encuentra nada que se parezca al precepto legal comentado, pues únicamente dice, en su artículo 108, que son nulos los votos que se den a personas no elegibles, de acuerdo con la Constitución y la misma ley; y en el capítulo de la no elegibilidad, se limita a insertar las prohibiciones constitucionales sobre elecciones de diputados, como si el cargo de presidente fuera inferior a aquéllos. Y esa omisión no causa extrañeza, pues parece que hubo el propósito deliberado de excluir de esa ley todas las disposiciones del código administrativo que tendían a proteger el derecho de sufragio y a garantizar su pureza.

Considero que, desde el punto de vista del estricto derecho, no existiría incompatibilidad legal entre su proclamación como candidato a la presidencia de la República y el ejercicio de una secretaría de estado; pero si la ley escrita ha callado sobre el particular, por descuido o por malicia, un precepto inviolable de ética política obliga al secretario, en tal evento, a renunciar a un empleo que podría colocarlo en situación ventajosa respecto de otros candidatos que carecerían de las influencias y el prestigio que tal puesto otorga indiscutiblemente.

"2.—Tendría yo que separarme del cargo de secretario de estado antes o después de tal proclamación y en ese caso cuándo debería hacerlo?"

Lo que da el carácter de candidato a la presidencia de la República es la proclamación hecha por un partido o agrupación política. En tanto que tal proclama-

ción no existe, tampoco existe, la candidatura más que en potencia. A mi juicio, la renuncia debería ser presentada el mismo día de la proclamación, como lo disponía el artículo 310 del código administrativo, en mala hora suprimido en las novísimas leyes electorales, redactadas con fines preconcebidos y propósitos manifiestos.

Me es grato suscribirme de usted su afectísimo amigo y seguro servidor.

Juan Lombardi

Panamá, enero 25 de 1928

Señor General

E. L. C.

Señor:

Por ausencia de uno de los miembros de nuestra firma no habíamos podido contestar la grata de usted del 13 del presente en la cual se sirve usted hacernos la consulta encerrada en estas dos preguntas:

"1.—Ejerciendo yo actualmente las funciones de Secretario de Estado, en el caso de ser proclamado candidato a la Presidencia de la República, habría incompatibilidad entre dichas funciones y la mencionada proclamación?"

"2.—Tendría yo que separarme del cargo de Secretario de Estado, antes o después de tal proclamación, y en ese caso, cuándo debería hacerlo?"

Las preguntas transcritas las contestamos así:

A LA PRIMERA:—No hay disposición alguna, ni constitucional ni legal, que prohíba lanzar candidato para Presidente de la República a un ciudadano que ejerza el cargo de Secretario de Estado.

A LA SEGUNDA:—No hay disposición expresa, constitucional o legal, que exija que el ciudadano que ejerza las funciones de Secretario de Estado tenga para poder ser elegido Presidente de la República, que separarse del ejercicio de las funciones de Secretario antes o después de ser lanzado como candidato; pero nos parece que, por analogía, debería aplicarse el artículo 58 de la Constitución, pues si ese artículo exige al ciudadano que desempeña el cargo de Secretario de Estado que se separe de su puesto con seis meses de anticipación a las elecciones para Diputado, para poder ser elegido como tal, con más razón debe exigirse esa separación para ser elegido Presidente.

Somos de usted atentos y seguros servidores.

Fábrega & Arias

Panamá, 17 de enero de 1928.

Señor General

Manuel Quintero V.

Presente.

Señor:

He recibido su carta fechada el 13 del corriente mes. En ella me pide usted mi concepto sobre los siguientes puntos:

"1.—Ejerciendo yo actualmente las funciones de Secretario de Estado, en el caso de ser proclamado candidato a la Presidencia de la República, habría incompati-

La Voz de las Provincias

tibilidad entre dichas funciones y la mencionada proclamación?"

"2.—Tendría yo que separarme del cargo de Secretario de Estado, antes o después de tal proclamación y en ese caso, cuándo debería hacerlo?"

Para contestar acertadamente los puntos anteriores, comenzaré por hacer un estudio de nuestra Constitución, y de las leyes electorales subsiguientes hasta el presente. El Art. 58 de la Constitución que se haya en el título del Poder Legislativo, dice: "El presidente de la República, los secretarios de estado, los magistrados de la corte suprema de justicia y el procurador general de la nación, no podrán ser elegidos diputados a la asamblea sino seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Igual inhabilidad alcanzará a los ciudadanos que hayan ejercido el Poder Ejecutivo."

Esta disposición consagra un impedimento constitucional para ser diputado.

El artículo 83 de la constitución que se halla en el título bre el poder ejecutivo, dice:

"El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la presidencia y la hubiere ejercido dentro los seis últimos meses precedentes al día de la elección del nuevo presidente, como ningún pariente comprendido dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco podrá ser elegido para este empleo."

Un secretario de estado puede ejercer la presidencia, a falta del presidente bien como designado, bien como secretario de estado elegido por mayoría de votos del consejo de gabinete.

Los artículos transcritos de la constitución no le atañen a usted.

El artículo 119 de la ley 89 de 1904, sobre elecciones populares, estableció el mismo impedimento constitucional respecto de los secretarios de estado para ser diputados pero con la restricción del término.

El artículo 310 del código administrativo, que se halla en el artículo IV sobre elecciones, estableció:

"Los empleados públicos, nacionales o municipales, que sean proclamados candidatos para puestos públicos remunerados de elección popular, están en el deber de renunciar sus destinos, el mismo día de la proclamación. Los votos en contravención a lo que dispone este artículo son nulos."

Y artículo 222 ibidem dice:

"Sólo los partidos políticos cuya existencia reconoce este código tienen derecho a lanzar candidatos para cargos de elección popular."

Si los anteriores artículos estuvieran vigentes, creo que sería deber jurídico suyo renunciar el puesto de secretario de estado tan pronto como lo proclamase candidato para la presidencia el partido político a que Ud. pertenece. Pero vino después la ley 60 de 1925, y, por medio de su artículo 207, derogó el título IV del

CON "BOLAS" NO NOS GANAN

Pesé, 29 de enero de 1928.
Doctor Arjona,
Panamá.

De nada valen el bluff y las artimañas de que se sirven los pocos opositoristas de la candidatura del general Quintero para llevar a conciencia habitantes este distrito que hay otro candidato de fuerza en las altas esferas oficiales. Por estas regiones, el quinterismo es un mar embravecido, cuyas olas todo lo invaden. Océ, hasta ayer silencioso, ha dado alta nota de su adhesión al inmaculado caudillo y así está la situación en el interior, que anhela ver en solio presidencial a este ídolo de las democracias, como justa compensación por sus servicios prestados a su partido y a la patria.

Corresponsal Viajero

MAS PRUEBAS DE LO MISMO

Remedios, 25 de enero de 1928.
General Quintero V.
Panamá.

Los abajo firmados, trabajadores en la construcción del muelle de este puerto protestamos enérgicamente contra el editorial de "Prensa Ilustrada" que

código administrativo y todas las disposiciones sobre la materia (de elecciones) anteriores a ella. Es, por tanto, esta ley, la que ha de tenerse en cuenta para resolver los puntos de su consulta.

El artículo 50 de la citada ley dispone que sólo los partidos políticos o agrupaciones de la misma índole cualquiera que sea su denominación, tienen el derecho a lanzar candidatos para cargos de elección popular. Y para tener derecho a lanzar candidatos para presidente de la República y diputados, deberán comunicar su existencia al jurado nacional de elecciones acompañando copia del acta de fundación a más tardar treinta días antes del término fijado para las votaciones. Y el artículo 51 prescribe, que la adopción de candidatos para presidente de la República y diputados será comunicada al jurado nacional de elecciones y a los jurados distritales, por lo menos veinte días antes del fijado para las votaciones, la de consejeros municipales, diez días antes, por lo menos. Y en su último inciso agrega: "si dentro de los términos expresados, se comprobare plenamente la existencia de algún impedimento legal respecto a uno o más de los candidatos adoptados, los partidos o agrupaciones políticas que hayan hecho la postulación podrán adoptar nuevos candidatos, en reemplazo de los impedidos."

También dispone el artículo 54 que no pueden ser elegidos diputados a la asamblea nacional los ciudadanos que el día de la votación desempeñen o hubieren des-

empeñado, dentro de los seis meses anteriores a esta, los empleos de presidente de la República, designado, secretario de estado, magistrado de la corte, procurador general de la nación, juez superior de la República, o cualquier otro empleo con mando y jurisdicción en toda la nación. Y tampoco puede ser elegido diputado el empleado público que haya ejercido sus funciones en todo el círculo electoral dentro de los noventa días inmediatamente anteriores a las votaciones. Y tampoco puede ser elegido diputado el empleado público, con jurisdicción o mando, que se encuentre en el caso del artículo 59 de la constitución.

El artículo 121 de la ley 60 de 1925 dispuso:

"El jurado nacional de elecciones declarará nula la elección de consejeros, diputados a la asamblea nacional y presidente de la República hecha en individuo que no reuna las condiciones de edad y ciudadanía requeridas por la constitución o sea ilegible conforme a esta ley."

Este artículo fue reemplazado por el artículo 24 de la ley 26 de 1926, la cual adiciona y subroga varias disposiciones de la anterior, dice así:

"Cuando la elección para presidente de la República, diputados a la asamblea nacional, y consejeros municipales recaiga en individuos que no reúnan las condiciones de edad y ciudadanía requeridas en la constitución o que no sean elegibles conforme a esta ley, la declaratoria de nulidad de la elección, en los dos primeros

casos, será hecha por el jurado nacional de elecciones y en uno caso, por el jurado distrital de elecciones y por el jurado de votación respectivo."

El artículo 62 de la ley 60 de 1925 por el cual se fijó la fecha de las elecciones, fue reemplazado por el artículo 11 de la ley 26 de 1926.

Dispuso el primero:

"El último domingo de cada dos años, tendrán lugar elecciones para consejeros municipales, y el mismo día, cada cuatro años, la de diputados a la asamblea nacional, y presidente de la República."

Y el último dispuso:

"El primer domingo de agosto de cada dos años, tendrá lugar elecciones para consejeros municipales, y el mismo día, cada cuatro años, para diputados a la asamblea nacional y presidente de la República."

He querido transcribir estos artículos, con la puntuación que tienen en las dos leyes citadas, para dejar a los gramáticos que aprecien lo que dice el uno y otro; pero yo comprendo, por transcripción primitiva, que elección para presidente se verificará este año el primer domingo de agosto.

Dada la exposición anterior puedo contestar su primer punto así:

En caso de ser Ud. proclamado candidato a la Presidencia de la República, estando ejerciendo actualmente las funciones de secretario de estado, no hay incompatibilidad legal entre dichas funciones y la mencionada proclamación.

El segundo punto puedo contestarlo así:

En caso de ser proclamado usted candidato a la presidencia de la República, no está usted obligado legalmente a separarse de cargo de secretario de estado después de la proclamación.

Como usted sabe muy bien, corresponde privativamente al jurado nacional de elecciones resolver las consultas sobre interpretación de las disposiciones electorales, sea que las hagan las autoridades, los partidos políticos, las corporaciones electorales, o los simples ciudadanos. Así es que será dicha alta corporación la que tendrá que decidir jurídicamente los puntos que usted se mete hoy a mi humilde concepto. Si mi opinión concordare con la de ella, será muy natural que sienta la satisfacción íntima de haber acertado.

Soy de usted atento y seguro servidor.

Samuel Quintero C.

casos, será hecha por el jurado nacional de elecciones y en uno caso, por el jurado distrital de elecciones y por el jurado de votación respectivo."

El artículo 62 de la ley 60 de 1925 por el cual se fijó la fecha de las elecciones, fue reemplazado por el artículo 11 de la ley 26 de 1926.

Dispuso el primero:

"El último domingo de cada dos años, tendrán lugar elecciones para consejeros municipales, y el mismo día, cada cuatro años, la de diputados a la asamblea nacional, y presidente de la República."

Y el último dispuso:

"El primer domingo de agosto de cada dos años, tendrá lugar elecciones para consejeros municipales, y el mismo día, cada cuatro años, para diputados a la asamblea nacional y presidente de la República."

He querido transcribir estos artículos, con la puntuación que tienen en las dos leyes citadas, para dejar a los gramáticos que aprecien lo que dice el uno y otro; pero yo comprendo, por transcripción primitiva, que elección para presidente se verificará este año el primer domingo de agosto.

Dada la exposición anterior puedo contestar su primer punto así:

En caso de ser Ud. proclamado candidato a la Presidencia de la República, estando ejerciendo actualmente las funciones de secretario de estado, no hay incompatibilidad legal entre dichas funciones y la mencionada proclamación.

El segundo punto puedo contestarlo así:

En caso de ser proclamado usted candidato a la presidencia de la República, no está usted obligado legalmente a separarse de cargo de secretario de estado después de la proclamación.

Como usted sabe muy bien, corresponde privativamente al jurado nacional de elecciones resolver las consultas sobre interpretación de las disposiciones electorales, sea que las hagan las autoridades, los partidos políticos, las corporaciones electorales, o los simples ciudadanos. Así es que será dicha alta corporación la que tendrá que decidir jurídicamente los puntos que usted se mete hoy a mi humilde concepto. Si mi opinión concordare con la de ella, será muy natural que sienta la satisfacción íntima de haber acertado.

Soy de usted atento y seguro servidor.

Samuel Quintero C.

LEA

En el próximo número

IMPORTANTES OPINIONES

sobre el mismo asunto

DE DISTINGUIDOS JURISTAS

DE DIVERSOS PARTIDOS